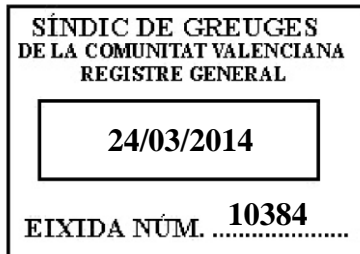




SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Conselleria de Bienestar Social
Hble. Sra. Consellera
Passeig de l'Albereda, 16
VALENCIA - 46010 (Valencia)

=====
Ref. Queja nº 1318365
=====

Asunto : Reducción prestación dependencia

Hble. Sra.:

Acuso recibo de su escrito en relación con la queja de referencia, iniciada a instancia de D. (...), sobre el asunto mencionado. De dicho escrito, de la documentación aportada por la persona interesada y de todo lo actuado, se deduce que su hija (...), hasta agosto del pasado año 2012 vino percibiendo prestación económica para cuidados en el entorno familiar que le había sido reconocida por importe de 598,79 euros, de la que a partir de entonces se detrajo el 15% adicional derivado de la aportación de la Comunitat Valenciana.

Pero es en enero de este año cuando, al percibir con retraso la mensualidad de noviembre pasado, recibe la cantidad de 442,59 euros sin notificación alguna que justifique esta drástica rebaja.

Requerido informe a la Conselleria de Bienestar Social nos informa, entre otras cuestiones, lo siguiente:

A (...) le fue reconocida la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional mediante Resolución del programa Individual de Atención con fecha 17 de abril de 2009.

El pasado año, el Pleno del Consejo territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia, realizó la evaluación de los cinco primeros años de aplicación de la Ley 39/2006, que motivo una reforma legislativa en la cual se adoptan una serie de medidas necesarias para garantizar su sostenibilidad, así como para asegurar y fortalecer en todo el ámbito nacional el desarrollo de dicha ley. Estas medidas fueron recogidas, además de en el Real Decreto Ley 20/2012 de

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en https://seu.elsindic.com		
Código de validación: *****	Fecha de registro: 24/03/2014	Página: 1
C/. Pascual Blasco, 1 03001 ALACANT. Tels. 900 21 09 70 / 965 93 75 00. Fax 965 93 75 54 http://www.elsindic.com/		

13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la Resolución de 13 de julio de 2012 de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia y a nivel autonómico en la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco de Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia de la Comunitat Valenciana.

Una de las medidas adoptadas en el Acuerdo del Consejo Territorial, fue reducir en un 15% las cuantías máximas de las prestaciones económicas por cuidados de entorno familiar, medida que entró en vigor en agosto 2012. Aunque el citado Acuerdo permitía a las Comunidades Autónomas, en función de sus necesidades de financiación y presupuestarias aumentar este porcentaje de reducción, en la Comunidad Valenciana no se consideró oportuno. Este hecho le fue comunicado mediante carta remitida el 28 de septiembre de 2012.

*Otro de los apartados del Acuerdo del Consejo Territorial es el relativo a la aprobación de los criterios sobre la relación entre la capacidad económica del beneficiario y la prestación económica asignada que se refleja en una fórmula matemática cuyas variables son la **renta personal del usuario** (descontando las prestaciones económicas de análoga naturaleza que reciba el mismo) cuyo cálculo se efectúa según la disposición adicional primera de la Orden 21/2012 de la Conselleria de Bienestar Social y el **grado de dependencia**, estableciendo además unas cuantías máximas. La aplicación de esta medida se hizo tras la entrada en vigor de la Orden 21/2012 de 25 de octubre de la Conselleria de bienestar social, aunque los beneficiarios lo percibieron en el pago del mes de enero de 2013 correspondiente al abono del mes de noviembre de 2012.*

Habida cuenta que tal y como establece el artículo 17.7 de la citada Orden, para actualizar las cuantías de las prestaciones reconocidas, no es preceptivo revisar la Resolución PÍA, no se ha emitido nueva Resolución y la capacidad económica considerada para la modificación ha sido la obrante en el expediente.

Es un objetivo de esta Comunidad Autónoma en materia de atención a las personas en situación de dependencia, hacer sostenible financieramente la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana, dando una primacía efectiva a los servicios profesionalizados, y prestando los cuidados adecuados que precisan las personas en situación de dependencia. En este sentido, se está realizando un gran esfuerzo de gestión y económico en un contexto muy complicado, y se está resolviendo progresivamente lo que en cada caso procede priorizando aquellas solicitudes de personas con un mayor grado de dependencia y por tanto mayores necesidades de atención.

El artículo 1 de la Ley de la Dependencia crea un derecho subjetivo para las personas en situación de dependencia en los términos establecidos en las leyes. Este derecho se compone de un nivel mínimo, igual para todos los españoles, financiado exclusivamente por la Administración General del Estado (artículos 1, 7.1º y 9 de la Ley). El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, ha establecido la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección.

Existe un segundo nivel fijado mediante acuerdos entre la Administración General del Estado y cada Comunidad Autónoma (artículos 8.2 y 10 de la Ley). El referido acuerdo contempla, entre otros extremos, el nivel mínimo y ayudas económicas para facilitar la autonomía personal. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, estableció las intensidades de protección de los servicios y las cuantías máximas de las prestaciones económicas de los distintos grados y niveles de dependencia, así como la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo de protección.

Por último existe un tercer nivel de financiación exclusivamente autonómica (artículo 7.3º de la Ley 39/2006). Este tercer nivel en la Comunitat Valenciana fue establecido en hasta un 15% adicional para prestaciones económicas (artículo 23.1.a de la Orden de la Conselleria de Bienestar Social de 5 de diciembre de 2007) habiendo sido modificado por la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social (artículo 23) por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana. La citada modificación establece un nivel adicional de protección que se concreta en algunas prestaciones económicas (prestación vinculada al servicio, prestación de asistencia personal,.....) y a personas beneficiarias de prestaciones económicas para las que el cálculo de la cuantía final de la prestación resulte inferior a 20 euros, que se les garantizará como mínimo la percepción de dicho importe.

El nivel adicional de protección se financiará con cargo a los fondos propios de la Generalitat, y no tendrán carácter de derecho subjetivo. (art. 23.2 de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social).

Dos son los temas principales que nos ocupan en la presente queja. El primero de ellos sería la revisión de la cuantía de prestaciones ya reconocidas calculando la capacidad económica de las personas beneficiarias utilizando datos de renta y patrimonio no actualizadas. El segundo se refiere a que no se ha dictado resolución administrativa de nuevo PIA para proceder a la actualización de la cuantía de la prestación resultando ésta siempre desfavorable para el beneficiario.

En relación al primer asunto la Resolución de 13 de julio de 2012 de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial para la Autonomía Personal y Atención a la dependencia estableció, entre otras cuestiones, los criterios mínimos comunes para la determinación de la capacidad económica personal de los beneficiarios y su participación económica en el coste de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. En su artículo 2 se establece que la capacidad económica de las personas beneficiarias del SAAD se determinará en atención a su renta y patrimonio.

En la misma Resolución se establece que la cuantía mensual de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional, se establece en función de la capacidad económicas de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia, de conformidad con la siguiente fórmula matemática:

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en https://seu.elsindic.com		
Código de validación: *****	Fecha de registro: 24/03/2014	Página: 3

$$\text{CPE} = (1,33 \times \text{Cmax}) - (0,44 \times \text{CEB} \times \text{Cmax}) / \text{IPREM}$$

Donde :

CPE : Cuantía de la prestación económica

Cmax: Cuantía máxima de la prestación económica.

CEB : Capacidad económica del beneficiario

En cuanto al segundo de los asuntos, la actualización de las cuantías de las prestaciones reconocidas, la Disposición Transitoria Tercera de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat Valenciana establece “ Las prestaciones de dependencia reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Orden deberán adaptarse, en su caso, a lo dispuesto en la misma, debiendo adoptar la Conselleria competente en materia de Bienestar Social las medidas oportunas para la determinación y aplicación de las nuevas cuantías de estas prestaciones.

Los efectos económicos de esta adaptación serán del día 1 del mes siguiente a la entrada en vigor de la presente orden, sin perjuicio de la correspondiente regularización en las nóminas mensuales”.

El artículo 17.7 de la Orden 21/2012, establece “La actualización de las cuantías de las prestaciones que se fije por normativa, será de aplicación directa, sin necesidad de revisar o modificar la resolución de aprobación del programa individual de atención”

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común “ La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación”. Tan sólo quedan exceptuados de esta obligación “los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de comunicación previa a la Administración. (art. 42)

El artículo 54.1. de la citada Ley 30/1992 de 26 de noviembre, establece: “Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (entre otros):

- b) Los que **resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos**, recursos administrativos, reclamaciones previas a la vía judicial y procedimientos de arbitraje.

De todo lo indicado hasta el momento puede concluirse que, con carácter general, la aplicación del Real Decreto ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad ha supuesto un retroceso significativo en el desarrollo de las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia. Así se adoptan entre otras medidas tales como:

- *Aplazamiento hasta el 1 de julio de 2015 del acceso al sistema de quienes obtienen una valoración de Grado I y de aquellos que aún habiendo sido valorados en Grado*

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: *****

Fecha de registro: 24/03/2014

Página: 4

1 nivel 2 antes del 31 de diciembre de 2011, no se les hubiera reconocido la prestación antes de dicha fecha.

- *Endurecimiento del régimen de incompatibilidad de prestaciones y servicios.*
- *Notable disminución de las cuantías de las prestaciones económicas.*
- *La Prestación para cuidados en el entorno familiar deja de producir efectos retroactivos para quienes a la entrada en vigor del RDL 20/2012 no hayan comenzado a percibir todavía tales prestaciones. A partir de la entrada en vigor del RDL 20/2012, las citadas prestaciones reconocidas a favor de estas personas quedan sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos años.*
- *Pasa a tener carácter voluntario el Convenio especial de personas cuidadoras y por consiguiente las cotizaciones serán a cargo exclusivamente, de quienes lo suscriben.*
- *Disminución de las intensidades de protección de los servicios establecidos para cada grado de dependencia.*

Este retroceso en el desarrollo de las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia se produce en un contexto socio económico que está suponiendo un empobrecimiento general de la población y en particular de las personas y grupos más vulnerables, como sin duda son las personas valoradas en situación de dependencia. Los datos reflejados en el informe sobre “ Evolución del desarrollo humano y la pobreza desde el inicio de la crisis (2006-2011) elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas hablan de que en la Comunitat Valenciana ha aumentado el índice de pobreza económica en un 40% contabilizando datos 2006 a 2011 pero en un 70% si tenemos en cuenta los datos del periodo 2008 a 2011. De igual forma aportan datos que corroboran aumentos significativos en relación a índices de pobreza material, porcentaje de número de pobres (por encima de la media de España), tasas de paro de larga duración o personas en situación de exclusión social.

El colectivo de personas dependientes se está viendo afectado especialmente por otras reducciones que les afecta simultáneamente al ya indicado de prestaciones de la dependencia, y que se producen en el ámbito social, sanitario, educativo, de inserción laboral,....., lo que aumenta la situación de vulnerabilidad y por ende los riesgos de exclusión.

A la situación descrita habría que añadir las reducciones como consecuencia de la normativa de la propia Comunitat Autònoma de la que destacamos:

- . *La importante reducción del nivel adicional de financiación, en un momento de especial dificultad económica de los/as beneficiarios/as. Si bien es cierto que el referido nivel adicional tiene carácter opcional y no supone derecho subjetivo, no es menos cierto que la Administración Autonómica, atendiendo a la situación descrita, debería redoblar esfuerzos para garantizar la atención a personas y grupos en situación de especial vulnerabilidad, como el de las personas dependientes.*
- . *Las derivadas de la implantación práctica del Sistema de Atención a la Dependencia en nuestra Comunitat (demoras en resolución de expediente de hasta tres años, revisiones de propuestas PIA de expedientes que han sobrepasado con creces los seis meses sin ser resueltos, personas fallecidas sin*

haber obtenido resolución PIA y que igualmente, se habían sobrepasado los seis meses legalmente establecidos para la resolución del expediente.)

Por el tema que nos ocupa en esta queja hemos de destacar otra cuestión que viene a agravar aún más si cabe, la situación de las personas en situación de dependencia. La cuestión en concreto es la aplicación de la nueva fórmula de cálculo la cuantía mensual de las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional, establecida en función de la capacidad económicas de la persona beneficiaria y proporcionalmente al mayor grado de dependencia. La Conselleria de Bienestar Social ha aplicado esta nueva fórmula de cálculo procediendo a revisar de oficio las Resoluciones PIA preexistentes. Para calcular la capacidad económica del beneficiario, la Conselleria de Bienestar Social, ha utilizado los datos de renta y/o patrimonio existentes en el expediente, es decir sin actualización de los mismos, sin tener en cuenta, que muchas de las personas afectadas pueden y de hecho han visto afectada su situación económica en estos últimos años.

Resulta paradójico comprobar que el resultado de la revisión de expedientes, con la aplicación incorrecta por parte de la Conselleria de Bienestar Social, de la nueva fórmula matemática a expedientes ya resueltos, utilizando datos de renta y/o patrimonio no actualizados, está dando como resultado, en todos los casos, disminuciones de las cuantías inicialmente otorgadas, en algunas ocasiones especialmente significativas. Resulta ilustrativo prestaciones cuya cuantía se reconocieron por importe de 398 euros y se han visto reducidas hasta el mínimo de 20 euros (reducción del 95%, correspondiente a la queja nº 201304045)

En lo que se refiere al expediente de (...) resulta:

- Que en fecha 06/7/2007 presentó solicitud de dependencia.
- Que se le reconoció su situación de dependencia en fecha 16/01/2009.
- Que en fecha 17/04/2009 se resolvió el Programa Individual de Atención, asignándole la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional por importe de 598,79 euros.
- Que la referida prestación económica se le ha revisado y actualizado de oficio por la Conselleria de Bienestar Social en aplicación de la normativa vigente tanto de ámbito nacional como autonómico.
- Que la revisión de la cuantía de la prestación ha dado como resultado la minoración de la misma a 442,59 euros.
- Que los datos económicos utilizados para calcular la cuantía de la prestación y, por tanto valorar la capacidad económica de la persona interesada, han sido los que constaban inicialmente en el expediente (Declaración IRPF de 2008)
- Que por parte de la Conselleria de Bienestar Social, no se han requerido u obtenido datos actualizados de renta y/ o patrimonio que permitieran una valoración real y actualizada de la capacidad económica de la persona interesada en el momento de proceder a la actualización de la cuantía de la prestación.
- Que al no requerirse, para la actualización de las cuantías de las prestaciones (según normativa autonómica), que por parte de la Conselleria de Bienestar Social se emita una nueva resolución del PIA en la que consten la fundamentación legal y los datos económicos utilizados para el cálculo de la capacidad económica de la persona interesada, ésta no ha tenido posibilidad de interponer recursos administrativos y/o

La autenticidad de este documento electrónico puede ser comprobada en <https://seu.elsindic.com>

Código de validación: *****

Fecha de registro: 24/03/2014

Página: 6

judiciales que contra la misma pudiera haber tenido derecho, produciéndose una verdadera indefensión frente a las actuaciones de la Administración.

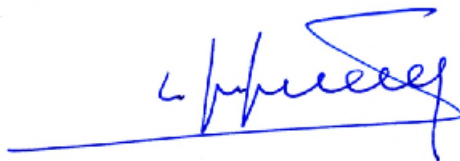
Por tanto, le **RECOMIENDO** a la Conselleria de Bienestar Social:

1. Deje sin efecto la revisión de la cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional, reintegrando a la persona beneficiaria, las cantidades que han sido deducidas desde su aplicación.
2. Restablezca la cuantía de la prestación económica preexistente según resolución del Programa Individual de Atención de la persona interesada.
3. Calcule la capacidad económica de la persona beneficiaria, con datos de renta y patrimonio actualizados.
4. Proceda a emitir Resolución Administrativa de revisión de la cuantía de la prestación, garantizando la seguridad jurídica de la persona interesada ante los actos de la administración.
5. Amplíe el nivel de protección adicional que permite la Ley a cargo de la Comunidad Autónoma, en concreto a todos aquellos expedientes cuya revisión diera lugar a la disminución de la prestación económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidador no profesional y de forma general al resto de prestaciones y servicios que pudieran verse afectados por la normativa estatal.

Le agradecemos nos remita en el plazo de un mes el preceptivo informe en el que nos manifieste la aceptación o no de la sugerencia que se realiza o, en su caso, las razones que estime para no aceptarla.

Para su conocimiento, le hago saber, igualmente, que a partir de la semana siguiente a la fecha en la que se ha dictado la presente resolución, ésta se insertará en la página Web de la Institución.

Atentamente,



Emilia Caballero Álvarez
Síndica de Greuges de la Comunidad Valenciana e.f.